

**Chillán, ocho de enero de dos mil veinticinco.**

**Visto:**

1°.- Que, comparece doña Ivonne Camila Flores Espinoza, abogada defensora penal pública, en representación del amparado Felipe Andrés Rosales Ramírez, quien deduce acción constitucional de amparo en contra de la resolución de fecha 27 de diciembre de 2024 dictada por la Sexta Sala de la ltma. Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros señores Enoc Gutiérrez, Waldemar Koch y el abogado integrante José Valenzuela, que rechazó la apelación presentada en favor del amparado, en causa rol 2006-2024, por considerar que la resolución dictada con fecha 7 de noviembre de 2024, por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que no dio lugar a la pena sustitutiva respecto de su representado se ajustó a derecho, no siendo procedente decretar sustitutiva alguna, decidiendo que deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad impuesta.

Explica que el procedimiento del cual emana la sentencia definitiva condenatoria se inicia con la formalización del amparado por el desacato cometido día 5 de diciembre del año 2023.

Indica que, después de diversas audiencias, el Ministerio Público presentó acusación y el día 7 de noviembre del 2023 se realizó audiencia de preparación de juicio oral, en la cual el Ministerio Público rebajó su pretensión punitiva en orden a tramitar la causa de acuerdo a las normas del procedimiento abreviado, reconociendo la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, solicitando, en definitiva, dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y de la ley de violencia intrafamiliar y sin costas.

Más adelante, plantea que ante la aceptación del imputado de los hechos contenidos en la acusación y de someterse a procedimiento abreviado, las alegaciones de la defensa se limitaron a solicitar que se otorgara la pena sustitutiva, por cumplirse todos los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216, tanto objetivos como subjetivos, fundamentando lo mismo tanto con el extracto de filiación del imputado como con prueba documental, sin que el Ministerio Público, por su parte, se opusiera a la concesión de la pena sustitutiva.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

Señala que el tribunal al resolver condenar a Felipe Rosales Ramírez a dos penas de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y de la ley de violencia intrafamiliar y sin costas; agregando que, en relación a la forma de cumplimiento de la pena y haciéndose cargo de lo alegado por la defensa, manifestar que *“Se estima que no se cumplen la exigencias legales, formales u objetivas, previstas en la ley, puesto que la disposición requiere que no se registren condenas anteriores por crimen o simple delito, tal no es el caso del encargo, de acuerdo a lo que figura en su extracto de filiación en el cual se lee la condena de 5109- 2019 del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, causa en la que se le condenó el 12 de diciembre 2019 imponiéndose como sustitutiva la remisión condicional. Se esgrime por la defensa la norma de la ley 18.216 que permite no considerar ciertas anotaciones si las mismas pueden considerarse o entenderse prescritas, sin embargo, la sentencia condenatoria es de 12 de diciembre de 2019 y los hechos son de 4 y 5 de diciembre de 2023 y entre cada hecho no hay 5 años.”*.

Por lo anterior, y otros argumentos, rechazó la petición de la defensa de pena sustitutiva y por otro lado, analizó la procedencia de otras penas sustitutivas, reclusión parcial domiciliaria nocturna y prestación de servicios en beneficio de la comunidad, indicando que no se cumplen los requisitos objetivos por la entidad o extensión de las penas impuestas, en este caso por superar los 3 años para la reclusión parcial y 300 días para la prestación de servicio.

Luego, con fecha 13 de noviembre del 2024, se presentó recurso de apelación en la referida causa, solicitando en definitiva que se revocará dicha resolución y que se hiciera lugar a la pena sustitutiva solicitada al Tribunal de Garantía, ello debido a que la condena anterior que registra su representado en su extracto de filiación del año 2019 y en la que fue condenado a la pena de 21 días de prisión en su grado medio como autor del delito de hurto simple, se encuentra en concreto prescrita para efectos de pena sustitutiva y no impedía la concesión de pena sustitutiva alguna, debiendo tener presente además la pena impuesta, el tipo de ilícito juzgado y los antecedentes sociales del amparado, todo lo que daba



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

cuenta que se cumplían todos los requisitos establecidos en la ley para conceder cualquiera de la penas sustitutivas de la ley 18.216.

A continuación, con fecha 23 de diciembre del 2024, se llevó a cabo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, la vista de la causa del recurso de apelación bajo el Rol 2006-2024, en la Sexta Sala, donde la defensa sostuvo lo ya referido ante el tribunal de Garantía de Los Ángeles, en cuanto a que se cumplían todos los requisitos de la ley 18.216 para la imposición de la pena sustitutiva de Remisión Condicional o de Libertad Vigilada, y que respecto del elemento objetivo lo que estaba en discusión era la condena anterior, que se encontraba prescrita para objeto de penas sustitutivas, respaldando su alegación en doctrina y jurisprudencia de Ilustrísimas Cortes de Apelaciones del país y de la Excelentísima Corte Suprema, y alegando respecto del elemento subjetivo, la existencia de antecedentes sociales de cumplimiento de requisitos subjetivos, tales como que el recurrente es un joven trabajador, que cuenta con un proyecto de vida en desarrollo, donde ha superado su situación de calle, teniendo actualmente su domicilio en la comuna de Los Ángeles, contando también con trabajo como comerciante en el terminal de buses Isla Jacob, acompañando certificados del sindicato y cartas de recomendación, así como también certificados que dan cuenta que se encuentra actualmente completando su educación básica contando con documentación otorgada por el asistente social del Instituto Regional de Los Ángeles e informe de personalidad del mismo establecimiento y documentación de la municipalidad que indicaban que su representado se adjudicó un proyecto Fosis de microemprendimientos, para terminar haciendo presente el propio espíritu de la ley 18.216, indicando, que el sentenciado no registra ninguna causa vigente por lo que también se acreditaba una conducta posterior a los referidos hechos.

Añade que no obstante dichas alegaciones, la Sexta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, resolvió lo siguiente: *“QUINTO: En este punto, resulta acertada la decisión del tribunal de no conceder al sentenciado la pena sustitutiva de libertad vigilada, dado que se ha comprobado que fue condenado por un delito de hurto simple cometido con anterioridad a los hechos*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

*de esta causa, los cuales también fueron sancionados antes de ser condenado en estos autos. Cabe aclarar que es irrelevante que el señor Rosales Ramírez haya sido previamente condenado a una pena de 21 días por un delito de hurto simple, ya que tal condena se emitió en virtud de su responsabilidad en la comisión de dicho delito, es decir, fue condenado por un simple delito y no por una falta. En ese sentido, es inapropiada la referencia hecha por la apelante a la doctrina citada en su recurso, puesto que, conforme a la literalidad de las disposiciones mencionadas, se concluye que éstas se refieren a la naturaleza del ilícito castigado y no a la cuantía de la sanción impuesta. Asimismo, el hecho de que el condenado registre la condena antes indicada, previa a la fecha de la sentencia que se apela, impide concluir que cumple con el requisito establecido en el numeral 2) del artículo 15 de la Ley 18.216, dado que su conducta anterior al hecho punible no garantiza que la intervención personalizada permitida por la ejecución de la pena sustitutiva de libertad vigilada lo disuada de cometer nuevos ilícitos en el futuro”.*

Considera que lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción desatiende lo dispuesto por las normas atinentes a la materia al realizar una errónea aplicación del artículo 1° en relación con los artículos 4° y siguientes de la Ley N° 18.216 que establece requisitos objetivos (no facultativos) para la concesión de la pena sustitutiva de remisión condicional; artículo 1° que en la parte pertinente señala “.... Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito ...”.

Lo anterior en virtud de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción rechazó recurso de apelación deducido contra una resolución que negó la concesión de la pena sustitutiva fundando su decisión en que la resolución fue dictada dentro de las facultades legales del Tribunal de Garantía y siguiendo la normativa vigente.

La letrada estima que el razonamiento de la Ilustrísima Corte es contrario a lo establecido en el artículo 21 de nuestra carta fundamental y desatiende el fondo



del asunto sometido a su conocimiento a través de la presente acción constitucional.

Agrega que la facultad de decidir sobre la concesión o revocación de las penas sustitutivas es una cuestión privativa de los jueces del fondo, pero ello no implica que dicha decisión carezca de fundamentación, aun si ésta encuentra su causa en una causal de carácter objetivo. Así lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Valdivia en resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, en conocimiento de un recurso de apelación Rol 430-2014, que transcribe.

Sostiene que la denegación de pena sustitutiva se basó en un fundamento ilegal que afectó negativamente la libertad personal del amparado, ya que, sin él, don Felipe Rosales debería haber cumplido su condena mediante una pena sustitutiva la cual solo restringe la libertad ambulatoria de manera parcial. El tribunal impugnado solo señaló para denegar la pena sustitutiva el fundamento ilegal ya señalado, no pronunciándose sobre la concurrencia o no de los demás requisitos legales. La consecuencia de dicha resolución ilegal es el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, lo que se traduce en una privación total de la libertad ambulatoria del amparado.

Considera que la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de 27 de diciembre pasado es contraria a derecho toda vez que para determinar la naturaleza de cumplimiento de la pena y decretar el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, interpretó los artículos 1 de la ley 18.216 en relación al 97 y 98 del Código Penal “contra reo” contraviniendo de manera expresa todos los principios del derecho penal, los cuales están resguardados en el artículo 5°, inciso final del Código Procesal Penal.

Termina solicitando tener por interpuesta acción constitucional de amparo a favor de su representado, y en contra de la resolución dictada con fecha 27 de diciembre de 2024 por la Sexta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Rol 2006-2024 y, previo informe y trámites de rigor, acogerlo, restableciendo el imperio del derecho, dejando sin efecto por ser arbitraria e ilegal la resolución que confirmó lo resuelto por el Juzgado de Garantía



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

de Los Angeles en la causa Rit 4605-2023, decretando la procedencia de pena sustitutiva solicitada o cualquiera de la ley 18.216, se subsanen las infracciones de derecho que le aquejan y que se otorgue una debida protección al amparado.

**2°.** - Que, informan don Claudio Gutiérrez Garrido y don Waldemar Koch Salazar, ministros titulares, y don José Andrés Valenzuela Farías, abogado integrante, quienes refieren que la causa Rol Corte 2006-2024 Penal, se originó por un recurso de apelación deducido por la defensa del condenado contra la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2024, dictada en la causa RUC N° 2301329176-4, RIT N° 4605-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en virtud de la cual se condenó al amparado Rosales Ramírez, a dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio cada una, como autor de dos delitos de desacato, ordenándose el cumplimiento efectivo de esas penas temporales.

Indican que el señalado recurso de apelación fue incluido en el primer lugar de la tabla ordinaria de la Sexta Sala de esa Ilustrísima Corte de Apelaciones, del 23 de diciembre último, compareciendo a la vista de la causa la defensora penal pública Ivonne Camila Flores Espinoza, quien instó por la revocación de la sentencia apelada, en el sentido de acceder a que su representado cumpliera las penas impuestas en alguna de las modalidades contempladas en la Ley 18.216.

Agregan que, terminada la vista de la causa, se citó a los intervinientes para la lectura del acuerdo adoptado por la Sexta Sala, para la audiencia del 27 de diciembre de 2024, oportunidad en que se comunicó la resolución que confirmaba la sentencia en alzada.

Sostienen luego que la decisión que rechazó el recurso de apelación de la defensa, se adoptó previo debate, haciéndose cargo de los argumentos expuestos por los intervinientes y explicando razonablemente los motivos por los cuales se confirmó la resolución en alzada.

A continuación, añaden que, de acuerdo a lo expuesto, es posible concluir que la decisión contra la que se recurre ahora de amparo, al haberse adoptado previo debate y estar debidamente fundada, no incurrió en las infracciones



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

reprochadas por la recurrente. Ello con independencia de que, al no compartir la decisión adoptada por la Sala, referida más bien a la interpretación de una norma legal, como se desprende de su recurso, esa parte haya optado por esta vía para discutir la legalidad de lo resuelto.

Finalizan su presentación solicitando tener por evacuado el informe solicitado.

**3°.** - Que, el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

**4°.-** Que, concordante con lo señalado en el considerando precedente, el recurso de amparo tiene como objeto restablecer el imperio del derecho ante cualquier perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de la libertad personal y seguridad individual, que tenga como causa un acto u omisión ilegal.

**5°.-** Que, la compareciente califica de ilegal y arbitraria la resolución dictada el 27 de diciembre de 2024 por la Sexta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causa penal Rol Corte N°2006-2024, cuyo tenor ,en lo pertinente, es el siguiente: *“QUINTO: En este punto, resulta acertada la decisión del tribunal de no conceder al sentenciado la pena sustitutiva de libertad vigilada, dado que se ha comprobado que fue condenado por un delito de hurto simple cometido con anterioridad a los hechos de esta causa, los cuales también fueron sancionados antes de ser condenado en estos autos. Cabe aclarar que es irrelevante que el señor Rosales Ramírez haya sido previamente condenado a una pena de 21 días por un delito de hurto simple, ya que tal condena se emitió en virtud de su responsabilidad en la comisión de dicho delito, es decir, fue condenado por un simple delito y no por una falta. En ese sentido, es inapropiada la referencia hecha por la apelante a la doctrina citada en su recurso, puesto que, conforme a la literalidad de las disposiciones mencionadas, se concluye que éstas*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

*se refieren a la naturaleza del ilícito castigado y no a la cuantía de la sanción impuesta. Asimismo, el hecho de que el condenado registre la condena antes indicada, previa a la fecha de la sentencia que se apela, impide concluir que cumple con el requisito establecido en el numeral 2) del artículo 15 de la Ley 18.216, dado que su conducta anterior al hecho punible no garantiza que la intervención personalizada permitida por la ejecución de la pena sustitutiva de libertad vigilada lo disuada de cometer nuevos ilícitos en el futuro.”*

6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, es necesario, en primer término, hacer presente que, atendido el mérito de los antecedentes, fluye con evidencia que el objeto del recurso de amparo es una resolución dictada por una Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, de manera que lo pretendido en definitiva, es que este tribunal se constituya en revisor de lo actuado por una sala de otra Corte de Apelaciones, lo que a juicio de estos sentenciadores implica arrogarse una competencia impropia como tribunal superior, que podría afectar, tanto, las normas de grado y jerarquía del Código Orgánico de Tribunales, como el principio de legalidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción de amparo deducida no resulta procedente.

7°.- Que, desde otra perspectiva, cabe advertir que la resolución objeto del reproche fue dictada por un órgano competente en el ejercicio de sus atribuciones, debidamente fundada y en el marco de las competencias que contemplan los artículos 37 de la Ley 18.216 y artículos 358 y 360 del Código Procesal Penal, consignando expresamente los sentenciadores las razones en virtud de las cuales decidieron confirmar lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.

8°.- Que, de esta forma, no se vislumbra alguna afectación ilegal a las garantías constitucionales que sirven de fundamento a la acción deducida, esto es, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual reconocidas en el artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República.

9°.- Que, así las cosas y de acuerdo a lo señalado, se desprende que la resolución ha sido dictada por autoridad competente, está debidamente fundamentada, se enmarca dentro de las atribuciones de los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC



Tribunales Superiores de Justicia y cumple con las formalidades legales correspondientes y, por consiguiente, no se advierte infracción a los preceptos citados por el recurrente ni ilegalidad alguna que justifique acoger el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza** el recurso de amparo deducido por la abogada doña Ivonne Camila Flores Espinoza, defensora penal pública, en favor de Felipe Andrés Rosales Ramírez, en contra de la resolución pronunciada con fecha 27 de diciembre de 2024 por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción en autos penales Rol N°2006-2024.

Regístrese, notifíquese, y ejecutoriada esta sentencia, comuníquese esta resolución por la vía más expedita.

Redacción a cargo de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado hoy.

**ROL N°3-2025 - AMPARO.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Guillermo Alamiro Arcos S., Erica Livia Pezoa G. Chillan, ocho de enero de dos mil veinticinco.

En Chillan, a ocho de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXNNXSTCGPC